

De la violencia social a la imposición estatal : el caso boliviano de los hidrocarburos	Título
Correa Vera, Loreto - Autor/a	Autor(es)
El prisma de las seguridades en América Latina. Escenarios regionales y locales	En:
Buenos Aires	Lugar
CLACSO	Editorial/Editor
2012	Fecha
	Colección
Nacionalización; Hidrocarburos; Luchas sociales; Movimientos sociales; Violencia social; Control social; Estado; MAS - Movimiento al Socialismo; Bolivia;	Temas
Capítulo de Libro	Tipo de documento
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20120413112715/prisma-13.pdf	URL
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO

<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)

Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)

www.clacso.edu.ar



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Latin American Council of Social Sciences



Loreto Correa Vera

DE LA VIOLENCIA SOCIAL A LA IMPOSICIÓN ESTATAL

El caso boliviano de los hidrocarburos

LA CONFRONTACIÓN ENTRE EL ESTADO BOLIVIANO y los movimientos sociales dieron como resultado una serie de levantamientos populares, que produjeron el debilitamiento político del sistema de partidos y la deslegitimación de la clase política dirigente hacia el año 2002-2003. Sin embargo, la ruptura del sistema político en Bolivia y la inauguración de una nueva forma de quehacer político en el país tras la elección de Evo Morales, no terminaron con la violencia social, sino que produjeron una transformación en su ejercicio.

Esta investigación pretende analizar cómo de la violencia social que caracterizó el periodo preliminar al ascenso de Morales, se ha dado paso a la imposición de un nuevo modelo de Estado que, si bien controla el desbande de los movimientos sociales, aún no logra contener los abusos de poder en el país. Nuestra hipótesis es que a partir de las promesas de campaña, de suyo sensibles para el país, se ha conformado la base de esta transformación política del Estado, en la cual se ha pasado de la violencia social a la imposición estatal. En ese sentido, el mejor ejemplo de ello se verifica en la política adoptada hacia los hidrocarburos.

* Doctora en Historia de la Universidad San Pablo CEU, Madrid, España. Magíster en Historia, Universidad de Chile y Magíster en Historia Latinoamericana, Universidad Internacional de Andalucía. Investigadora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile.

1. RESISTENCIA POPULAR FRENTE AL ESTADO: LEGITIMIDAD DE LA LUCHA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN BOLIVIA

La insuperada tradición de exclusión social sumada a la creciente pauperización de la población boliviana, producto de los gobiernos militares durante las décadas de los sesenta y setenta, fue un hecho incontrastable en Bolivia. Posteriormente, la imposición del modelo neoliberal –con el Decreto 21.060 de reforma del Estado– en los años ochenta y mediados de los noventa, la falta de eficiencia y legitimación de un modelo de estado centralista boliviano desde fines del siglo XX y hasta el 2003, fueron causantes de una profunda resistencia popular en el país.

Se suman, a ello, el fracaso de la política antidroga, que provocó la continua rebeldía de los movimientos campesinos en la zona del Trópico cochabambino, y el respaldo de éstos a las reivindicaciones sectoriales de organizaciones campesinas, indígenas, mineras y urbanas del resto del país.

Así desde el año 1996 se fueron consolidando nuevos actores políticos, los que –actuando como movimientos sociales en defensa de los derechos de los indígenas (1996), del agua (2000), el gas (2003), los recursos naturales y los excesos de la capitalización (2004-2005)– no cesaron sino hasta conseguir la emergencia de una conciencia política nacional renovada y con un marcado tinte mestizo andino de sus protagonistas. Esta compleja y original lucha social es la que entroniza lo andino-amazónico bajo la conducción política de Evo Morales en el poder. Un nuevo modelo político económico social que tiene en su eje la idea de la superación histórica de la exclusión social.

En ese contexto, Bolivia carece de un liderazgo político sustancial. De esto se desprende la falta de liderazgo político con visión nacional en el Oriente del país, que deja afuera del proceso revolucionario emergente a las élites conservadoras, que están concentradas fundamentalmente en tres departamentos de Bolivia: Tarija, Beni y en mayor medida Santa Cruz. Desacreditada por su centralismo, corrupción, falta de modernización y clientelismo, la élite paceña cede paso al ascenso político paulatino de la izquierda intelectual boliviana, cuyo máximo exponente es Álvaro García Linera. Este intelectual aglutina la formación de un nuevo modelo de cambio que articula de manera ideológica la plataforma reivindicativa de Evo Morales, permitiendo la coherencia y ascenso del líder cocalero en el país.

¿Cuál había sido el diagnóstico realizado por el MAS? El descalabro del sistema de partidos y la incapacidad de diálogo político entre los distintos y fluctuantes liderazgos populares en el período 1985-2000 llevaron a que el modelo de estado intermediador de una democracia boliviana formal, terminara por desacreditarse hasta concluir

en una crisis de legitimidad estatal sin retorno. El MAS ofrecía así un partido instrumental tejido desde las bases sociales de la ruralidad boliviana. En la relación del MAS-IPSP y las organizaciones urbanas y mineras en el período de crisis se había producido lo que los partidos tradicionales del país habían perdido, una red de control de las organizaciones a través de un sistema de alianzas (Suazo, 2008: 33).

La violencia, instrumento desestabilizador del país, era la característica relevante de esta crisis. Las innumerables huelgas, paros de todos los gremios, la política de los bloqueos nacionales forzaron a que el Estado buscara, entre febrero y octubre de 2003, en las fuerzas armadas el restablecimiento de la seguridad pública transformándolas en guardianes de la seguridad interna y el orden. Este fenómeno no era nuevo en Bolivia. Sin embargo, la visibilidad pública a través de los medios de comunicación sumada a la cantidad de heridos y muertos de ambos episodios, transformaron la percepción del gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada en un peligro social insostenible en el país. Efecto de ello era que la policía nacional se había amotinado en La Paz, dejando al descubierto la incapacidad del Estado de contención de las masas sociales.

De esta manera, el control social a través de la inevitable acción militar con armamento de guerra, tanto a nivel urbano como rural en Bolivia, expusieron públicamente la inoperancia del Estado frente a un MAS y un Eje Pachakuti ineludibles en la lucha callejera. La consigna había encontrado en la lucha por la venta de gas a Chile, la excusa final de los excesos del neoliberalismo, y la consigna fue, entre febrero y octubre del 2003, que más valía la muerte que seguir aceptando la violencia y la venta de los hidrocarburos que pertenecían a todos los bolivianos en el papel, y a las transnacionales en la práctica.

Algunos intelectuales hablaban de Bolivia como *estallido fallido* en esos momentos, el fracaso de la nación y la vulnerabilidad a los conflictos internos violentos y el deterioro social (*Foreign Policy*, 2006). A partir de una violencia callejera instalada en sucesivas huelgas, reclamos cartucho de dinamita en mano, bloqueos en las principales carreteras de Bolivia, marchas mineras hacia la capital del país, interrupción de los servicios públicos, y quemas y saqueos de las oficinas públicas, aduana, ministerios, alcaldías, gobernaciones, el sistema político colapsó y el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renunció marchándose del país. En su reemplazo quedaría interinamente Carlos Mesa, asumiendo la magistratura en el contexto más crítico que vivió Bolivia en dos décadas.

En lo sucesivo, Bolivia exhibió la instalación paulatina e instrumental de la lucha violenta callejera en Occidente, y la lucha asamblearia, cívica y discursivamente incendiaria y antisistémica, como

mecanismo de cambio frente a la no resuelta violencia estructural del Estado. Estos dos tipos de confrontación, a partir del 2003-2004, establecerían la necesidad real de una revolución política.

En ese contexto, y considerando la incapacidad de negociación del Estado, la lentitud en la aplicación de la norma constitucional y la presión de las masas urbanas, la violencia social boliviana encontró en Evo Morales, la figura capaz de aglutinar la fuerza del descontento conjuntamente con una plataforma de cambio que impulsara la “refundación del país”. La presidencia sitiada, como ha dicho el propio Carlos Mesa, lo obligó 18 meses más tarde a una nueva renuncia y al gobierno provisional de Eduardo Rodríguez Veltzé. De este modo, en junio de 2005, Mesa dejaba el gobierno a favor del presidente de la Corte Suprema de Justicia en respuesta a las reiteradas protestas callejeras, el bloqueo de las carreteras y la paralización completa del país.

En consecuencia, la violencia en el país no era sino la expresión máxima de la dramatización de los conflictos estructurales no resueltos desde la Revolución de 1952. Pese a la percepción generalizada que el proceso terminaría indefectiblemente en o un golpe de estado, la interrupción de la democracia o guerra civil en ciernes, lo cierto fue que a través de un proceso electoral Bolivia condujo al principal líder opositor a la primera magistratura del país. En el centro de la disputa estaba la política de los hidrocarburos.

EL ASCENSO DE MORALES AL PODER: LAS TAREAS URGENTES

Mucho puede cuestionarse acerca del proceso de reformas estructurales y la estabilidad macroeconómica de Bolivia entre 1985 y 2003. Sin embargo, en lo que la mayoría de la intelectualidad boliviana coincide es en que al final de casi dos décadas de funcionamiento de un modelo afín a los lineamientos del FMI, el resultado no se tradujo sino en una percepción generalizada de entreguismo extranjerizante de los sectores estratégicos de la economía (hidrocarburos, minería, transportes, telecomunicaciones) y, pese a una incipiente inclusión indígena en el parlamento nacional, en ausencia de gobernabilidad representativa.

El fin de la *democracia pactada* era una situación que, para la mayoría de la población boliviana, era escasamente remontable en términos macroeconómicos y mucho menos en términos políticos.

A pesar de las medidas proactivas del Presidente Mesa, el resultado práctico de su gobierno era que no había sido capaz de resolver las cuestiones relacionadas con la explotación de los recursos naturales de Bolivia y que los programas de erradicación de la coca, los derechos indígenas, y el grado de distribución del poder entre el gobierno central y los departamentos era deficitario.

En aquel entonces, Carlos Toranzo y otros analistas sostenían que el problema de fondo era que la inestabilidad crónica del país no había sido causada por las medidas aplicadas, sino por incapacidad y debilidad de las instituciones de Bolivia de responder a las demandas del país frente a una sociedad civil movilizada. Era un hecho real: el “Pacto por la soberanía y la dignidad nacional” habían terminado con la paciencia de un Mesa atribulado y desconcertado (Zuazo, 2008: 34).

Consciente de su condición absolutamente extraordinaria en la primera magistratura del país, el presidente Eduardo Rodríguez se comprometió a convocar a elecciones legislativas y presidenciales. El 18 de diciembre de 2005, el 85% del electorado se acercaba a las urnas y daba el 54% de respaldo al líder cocalero frente al 29% obtenido por su contendor, el político adenista y presidente Jorge Quiroga del PODEMOS, una coalición que concentró los reducidos escombros del ADN, MIR y MNR; el 8% fue obtenido por un partido de centro derecha, Unión Nacional, encabezado por Samuel Doria Medina, un acaudalado cochabambino de la industria cementera.

PODEMOS había expuesto en su plan de gobierno que:

[...] como dice nuestra Constitución, el gas, como recurso natural, es de pertenencia exclusiva del Estado boliviano y no puede ser enajenado o transferido a dominio privado, sea nacional o transnacional. Por tanto, creemos que el debate de la nacionalización del gas es un debate falso y demagógico. Quienes reclaman la nacionalización del gas no están pidiendo la recuperación del recurso natural como tal, que siempre le perteneció al Estado; sino la expropiación de inversiones externas desarrolladas en campos y facilidades de explotación atentando contra principios de seguridad jurídica y desincentivando la inversión. Por ello, somos concientes que la riqueza proveniente de la explotación del gas debe beneficiar primordialmente a los bolivianos y que las empresas que lo explotan, nacionales o extranjeras, deben someterse a reglas de juego claras y obtener un beneficio razonable de sus actividades, de manera que cuenten con los incentivos necesarios para continuar realizando sus inversiones, pero, a la vez, compartiendo los beneficios con el Estado, que es en definitiva el propietario de los recursos naturales.

En esta línea, la modificación de la Ley de Hidrocarburos, así como la transparencia de los futuros contratos estaba en el centro de un nuevo gobierno¹.

1 PODEMOS. Una nueva Bolivia con progreso y paz. En <http://www.cne.org.bo/proces_electoral/generales2005/comunicacion/egp2005_programa_podemos.pdf>, p. 20.

Contrastaba a esto la idea del MAS. Desde la plataforma opuesta, Morales explicaba en su propuesta que:

Como resultado de la aplicación de una política neoliberal en los últimos 25 años de retorno a la democracia, los hidrocarburos fueron entregados a manos privadas. El control y dirección de este sector estratégico de la economía nacional quedó en manos de empresas transnacionales que usufructuaron nuestras riquezas bajo la única visión de mejorar su rentabilidad, donde sus intereses y prioridades no coinciden con las necesidades y prioridades nacionales.

Las empresas transnacionales mantienen, dentro de sus estrategias y planes en Bolivia, obtener una alta rentabilidad de sus inversiones con la exportación de gas como materia prima, sin ninguna consideración seria del proceso de industrialización en nuestro país, pero sí en otros países donde mantienen operaciones.

Nos preguntamos: ¿por qué Bolivia debería mantenerse relegada en lo que se refiere a industrialización, dentro del contexto regional?

Ahora es cuando debemos revertir esta situación logrando una Bolivia Industrial con una gran base de inclusión, equidad y justicia social, con la industrialización del gas natural como recurso estratégico para ello.

Los anteriores gobiernos lo único que hicieron fue permitir, prevaleciendo sus intereses propios, ajenos al Estado Nacional, que en nuestro país seamos compradores de nuestra propia riqueza, pagando los mismos precios e inclusive más altos que aquellos que nunca tuvieron hidrocarburos en su suelo.

Frente a esta absurda situación se ha levantado una profunda conciencia sobre la necesidad de que prevalezca el interés nacional antes que el de las transnacionales en el destino de los hidrocarburos. Por ello, el pueblo boliviano decidió *recuperar la propiedad de los hidrocarburos y el control y la dirección de este sector estratégico*.

La consigna histórica de la nacionalización de los hidrocarburos se ha convertido definitivamente en un imperativo histórico si queremos hablar de dignidad, de soberanía y de desarrollo productivo del país. El pueblo comprende claramente que si estas ingentes riquezas no son utilizadas pensando primero en los bolivianos, Bolivia quedaría condenada a seguir siendo un país mendigo y menospreciado en el contexto regional e internacional (MAS, 2005) ².

Con Morales de presidente, el proceso boliviano levanta dos ejes urgentes de transformación en su sistema político. Por un lado, el tema de la *representatividad* y, por el otro, el de la *descentralización*.

2 MAS. Programa de gobierno 2006-2010 "Bolivia digna soberana y productiva para Vivir Bien" en <http://www.cne.org.bo/proces_electoral/generales2005/comunicacion/egp2005_programa_mas.pdf>, pp. 20-36.

En efecto, si por un lado se advierte que la gran mayoría de la población carece de influencia sobre la toma de decisiones políticas del Estado, por el otro se constata que las regiones económicamente más pujantes no perciben los beneficios del escaso progreso de los ingresos económicos del país. La pugna entre representatividad y descentralización terminan por colapsar el sistema constitucional y obligan a plantear el establecimiento de un modelo de cambio a nivel constitucional.

Sin embargo, si la insospechada victoria en primera vuelta era para Morales, lo más insólito era el apoyo parlamentario al MAS en la Cámara de Diputados (72 de los 130 escaños), y la presencia masista de casi la mitad de los senadores (12 de 27), lo que le proporcionaría la base para actuar sobre sus tres promesas de campaña:

- La nacionalización del sector estratégico del país, los hidrocarburos;
- la aplicación de la reforma agraria y;
- la creación de una asamblea constituyente que redactase una nueva constitución para el país.

Al cabo del primer año de gobierno, el informe de *Crisis Group* (2006) sobre América Latina señalaba que:

El decreto de nacionalización ha tensionado severamente las relaciones con Brasil y Argentina, y todavía podría instar a los inversores extranjeros a abandonar el país. Como Bolivia necesita inversión para desarrollar sus recursos, el gobierno debe garantizar el respeto de los contratos y las inversiones.

Sin embargo, el tema de la descentralización del poder era un obstáculo aún mayor. En campaña, Morales había asegurado que ayudaría a las regiones en sus demandas autonómicas de administración de los recursos naturales. Esta actitud fue dejada de lado ante la presión política de los sectores trotskistas del MAS y de un grupo de asesores cercanos al presidente que estimaban que de llevarse a cabo la autonomía, iba a ser irreversible la hegemonía del Oriente del país. En el análisis, tampoco iba a ser posible subsecuentemente aplicar la reforma agraria en las tierras bajas. Con ello, el movimiento autonómico y el conflicto en favor de la realización de un referéndum para la elección de los gobernadores recibieron un impulso tal, que obligó a Morales a moderar las transformaciones en el país. Pendiente estaba también por resolver qué hacer con el tema de la droga. En especial las medidas coactivas de represión legal y de interdicción, tanto para

convencer tanto a los vecinos como a Washington que su gobierno no toleraría un incremento en el tráfico de cocaína.

En la práctica, ocurría un fenómeno adicional nuevo: la aparición de nuevos cooperantes para el país, Cuba y Venezuela, y el entorno internacional empezaba a observar con cuidado que las asperezas de la campaña cedían paso a un gobierno ansioso por reformas profundas, pero incapaz de incendiar el vecindario con un indigenismo estadocéntrico. Una nueva forma con una antigua línea de lucha política: aquella que enarbolaba la vieja tradición sindical, esta vez de la mano del MAS y la COB. Esta base es la que sostiene un discurso de ruptura con la base política oligárquica del país y en la que por primera vez no se observa que el movimiento social se pliegue al MIR (gob. Jaime Paz Zamora) o al MNR (Víctor Paz Estenssoro o primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada), por ejemplo. Se trata de una base políticamente independiente que se conforma en una alternativa política viable y capaz de hacerse cargo del sistema político.

Ahora bien, ¿cuál era el plan de gobierno? Lo esencial: reducir la pobreza y atajar la aplicación del liberalismo. La estrategia clave comenzó por la nacionalización de los hidrocarburos, siguió con una nueva reforma agraria y en paralelo con la imposición del cambio de la carta constitucional (Araya *et al*, 2009: 101-113).

3. LA IMPOSICIÓN DE LAS PROMESAS DE CAMPAÑA

El ascenso del MAS constituye una segunda revolución en Bolivia. No se trata de un proceso insurreccional clásico, de toma de poder por la fuerza, sino de una larga labor de “trabajo político” de mayorías excluidas de la línea sistémica de los partidos. Con una conciencia social emanada desde la base rural del país, el ideario del MAS es visto por Álvaro García Linera como una consecuencia directa del fracaso de regulaciones y políticas públicas de un “bloque social compuesto por fracciones empresariales vinculadas al mercado mundial, partidos políticos, inversionistas extranjeros y organismos internacionales de regulación que ocuparon el escenario dominante de la definición de políticas públicas” (García Linera, 2008: 335).

Descrito de este modo, no es extraño, que produciéndose la victoria electoral en primera vuelta como ocurrió en el 2005, el escenario de gobierno posterior considerara aplicar medidas que efectivamente condujeran a una reconfiguración de la organización económica. Posiblemente, también, esta sea la razón por la que los mecanismos de diálogo expuestos por el MAS y el nuevo presidente difieren de lo realizado por los gobiernos precedentes. Ahora, ¿cómo puede entenderse el accionar del MAS? Morales trata de terminar con el colonialismo

interno, y acabar con la exclusión estructural del mundo indígena. Esta refundación es de responsabilidad de un “gobierno de los movimientos sociales” (Stefanoni, 2009: 39).

Teniendo mayoría parlamentaria y con una presidencia robustecida por la victoria, el gobierno de Morales aplica el “rodillo parlamentario”, término coloquial en Bolivia que se utiliza para conseguir los votos necesarios en el Parlamento con el objetivo de dar curso a iniciativas del Ejecutivo. El rodillo, aplicado en otras épocas con otros destinos, incluyendo las reformas estructurales, esta vez, tratará de ser usado exactamente para desarmar el sistema existente. De este modo se aplican los marcos de legitimidad jurídica necesarios para su constitucionalidad, pero sobre todo para revertir lo que García Linera explica como la “crisis estatal” tanto política como económica de “larga duración que había vivido Bolivia hasta ese entonces.

No se debe olvidar que las construcciones nacionales modernas, como hechos de unificación cultural y política, se levantan sobre procesos exitosos de retención y redistribución del excedente industrial-mercantil; de ahí que las propuestas de autonomía departamental de los Comités Cívicos, cíclicamente reivindicada cada vez que hay una renta hidrocarburífera a disponer, o de autogobierno indígena con la que distintos grupos sociales cuestionan la configuración del bloque de poder estatal y el ordenamiento institucional, develan a su modo las fallas de un orden económico de larga data que los últimos años sólo ha exacerbado sus componentes más elitistas, mono-productivos y externalizables en el mercado mundial (*Ibíd.*: 337).

Renta y tierra son claramente visualizados como los centros del cambio, pero, sobre todo, como los ejes de la exclusión en la misma dirección: exclusión de la renta de los hidrocarburos³ y

3 Para entender el peso de Repsol YPF, que en 2005 concentraba el 30% de la inversión en Bolivia en el área, véase de Vicente Boix “Nacionalización de los Hidrocarburos: un imperativo ético” en <<http://www.rel-uita.org/internacional/bolivia-petroleo.htm>> consultado el 21 de octubre de 2011. Natalia Ceppi ha descrito que, después de la nacionalización “[...] YPFB se presenta como único ente legítimo y legal en materia energética, fijándose su participación en el 51% de las acciones de las empresas Andina SA, Chaco SA, Petrobrás Bolivia Refinación SA, Transredes SA y la Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA. Además, las empresas transnacionales que tenían contratos con el Estado boliviano para la explotación de los hidrocarburos, tuvieron que redefinir su situación mediante la firma de nuevos acuerdos cuya aceptación quedó sujeta a la actuación del Poder Legislativo”. Véase: “Hidrocarburos y procesos autonómicos en Bolivia. Factores intervinientes en su fragmentación social” en *Revista Ciencia, docencia y Tecnología* (Concepción del Uruguay) N° 41, noviembre de 2010; en <www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17162010000200004&lng=es&nrm=iso&tlng=es#notas>.

exclusión de la renta de la tierra por la concentración de la propiedad agraria⁴.

4. NACIONALIZACIÓN: POR LA RAZÓN O LA FUERZA

La nacionalización de los hidrocarburos de 2006 es el resultado de una larga reflexión sobre los beneficios obtenidos por Bolivia, exactamente del proceso opuesto, vale decir, de la ley de capitalización de 1997. Si lo que quiso en su momento fue constituir *joint ventures* a fin de conseguir una mayor inversión en el país y, por ende, una mayor renta por concepto de los beneficios de la industria petrolera, al cabo de una década de iniciado los contratos con empresas extranjeras, la conclusión era que el país se encontraba en una disyuntiva respecto al derecho de propiedad de los hidrocarburos y luego, que los beneficios del proceso eran magros y mal distribuidos (Correa *et al.*, 2003: 30-36).

A principios del año 2000, nadie ponía en duda en el sistema político formal boliviano la necesidad de mayor inversión en el sector. Sin embargo, los resultados de la capitalización indican claramente que aunque la idea era apropiada, la forma consumió los resultados en un fracaso macroeconómico comprometiendo no sólo la renta nacional, sino los esfuerzos de equidad. La indignación social del país, las “dos bolivias” de las que hablaba el líder aymara Felipe Quispe eran resultados por un lado del latifundismo y por el otro de una nueva élite social ajena a la realidad boliviana. Prueba de lo anterior es el resultado devenido por concepto de recaudación fiscal (ver gráfico 1).

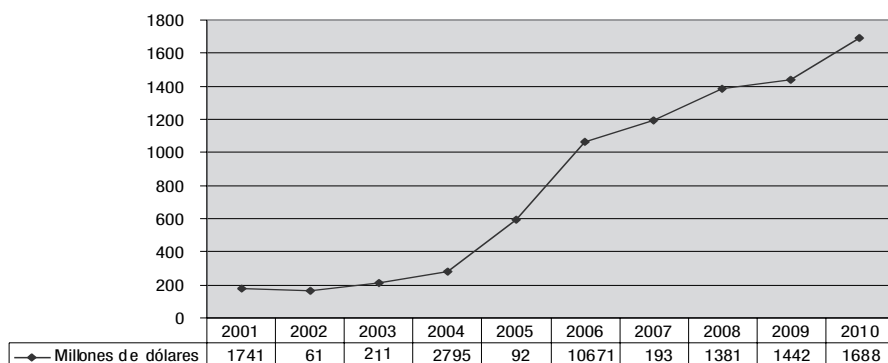
Desde el año 2001-2003, sólo ingresaron U\$S 546 millones, con una balanza comercial de tan sólo U\$S 1.673,4 millones. Desde el año 2001-2005, los ingresos por concepto de hidrocarburos no superaron los U\$S 1.417 millones, de una balanza comercial de U\$S 2.926,5 para el 2005. En tanto que en el último quinquenio los ingresos sumados alcanzaron U\$S 6.771 millones. Cabe destacar que el año 2009 muestra una renta de U\$S 1.442 de una balanza comercial para 2009 de U\$S 5.412,6 millones⁵. Visto así, de manera proporcional, la renta petrolera partió siendo un tercio de los ingresos país (32,6%), para bajar a un quinto de los ingresos por concepto de exportaciones (20,2%) y luego, durante la administración Morales, ha subido al 26,6%⁶.

4 Para la constitución de la propiedad agraria en Bolivia, véase el texto del director del INRA de Bolivia en el año 2006, Lic. Juan Carlos Rojas Calizaya, “La reforma agraria boliviana. Recuento histórico de marchas y contramarchas”. En <www.rlc.fao.org/es/desarrollo/tenencia/pdf/05doc.pdf>.

5 Cifras ALADI, (2010).

6 La consulta de fondo que hay que hacer sobre estas cifras es si estas proporciones se deben a un aumento de volúmenes de exportación. La respuesta es ne-

Gráfico 1
Ingresos del Estado generados por pago de regalías e Impuesto Directo
a los Hidrocarburos (IDH), 2001-2010



Fuente: elaboración propia basada en el "Informe 2010 año de inversión y reactivación" (YPFB, 2010).

A raíz de los sucesos de octubre del 2003, el Estado boliviano cambió sus ingresos respecto de la renta petrolera y las empresas capitalizadas que antiguamente se quedaban con el 82% de los ingresos, pasaron por ley primero a detentar el 32%, luego el 50% y posteriormente a ser nacionalizadas. Las modificaciones comenzadas con la Ley N° 3.058, de mayo de 2005, y que crearon el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del 32 % sobre el total producido y, con posterioridad, aquella que promulgó el Decreto Supremo de Nacionalización de los Hidrocarburos, N° 28.701 el 1° de mayo del 2006, fueron instancias legales precedidas por enormes manifestaciones populares, ocasiones en las que el Estado estuvo en el entredicho permanentemente y en las que los actores sociales se manifestaron en toda amplitud.

gativa. La subida de la renta en el último quinquenio justamente responde a la recaudación bajo la nueva Ley de Hidrocarburos que decretó la nacionalización. En el contexto de la capitalización, es dable sostener que la renta y proporción de los hidrocarburos se habría mantenido en el tercio real de las exportaciones, con un aumento progresivo en términos de precio del valor del gas. Sin embargo, como los contratos de venta de gas, tanto a Argentina como a Brasil tenían precios inamovibles en el antiguo sistema de empresas capitalizadas, es de suponer que los ingresos reales por venta de hidrocarburos no habrían superado los U\$S 300 a 400 millones por año.

5. ¿CÓMO SE IMPLEMENTÓ LA NACIONALIZACIÓN?

El 1° de mayo de 2006, mediante el Decreto “Héroes del Chaco”, el gobierno de Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos de Bolivia. Para ello, el presidente, en uso de sus facultades políticas, exigió a las empresas privadas su producción. Ese día, el Ejecutivo movilizó a las Fuerzas Armadas bolivianas y estas se desplegaron en todos los campos de gas y oficinas de las empresas petroleras en los departamentos del país. Oleoductos, gaseoductos y refinerías del país fueron ocupadas sin oposición civil alguna⁷.

Con la nacionalización, el Estado recuperó efectivamente la propiedad, la posesión y control de los recursos. De esta manera, YPFB asumió su comercialización, condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno, como para la exportación y la industrialización. En este contexto, todas las direcciones de funcionamiento del sector (producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización) hidrocarburos pasaron a manos del Estado:

Con la nacionalización, Evo Morales no ha hecho otra cosa que cumplir con uno de los más importantes compromisos de su campaña electoral, que a la vez era una exigencia fundamental del movimiento popular de su país frente a los gobiernos neoliberales que lo precedieron. Tenía tanto arraigo en el pueblo la demanda de nacionalizar los hidrocarburos que llevó al derrocamiento de los presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa y forzó a la convocatoria anticipada de elecciones en las que resultó arrolladoramente ganador el actual mandatario boliviano. ¿Qué esperaban las transnacionales? Que Evo defraudara las aspiraciones populares, como han hecho otros líderes de la llamada izquierda ‘moderna y responsable’, y se rindiera a las presiones de los centros financieros internacionales dada la penuria de las arcas bolivianas. Pues se equivocaron rotundamente y esa es la causa de tanta alharaca en los últimos días. La nacionalización no sólo revertirá en beneficio de las mayorías gran parte de la tajada que se quedaban las transnacionales sino que sentará el ejemplo de cómo un pueblo puede levantarse del empobrecimiento extremo si decide ejercer la soberanía sobre sus recursos naturales. Las mayorías bolivianas fueron sumidas en la miseria a lo largo de siglos mientras la plata de Potosí enriquecía a la corona de España, historia repetida más tarde con el estaño por las metrópolis neocoloniales, para no hablar del despojo de sus yacimientos de salitre y guano y de su salida al mar durante la guerra del Pacífico, a la que empujaron a Chile los capitales británicos (Guerra, 2006)⁸.

7 Ver: Raquel Orozco, Fernando López y Bernardo Valdivieso “Nacionalización e industrialización de los hidrocarburos en Bolivia” en <www.nuevabolivia.com.ar/?p=1039>.

8 Ángel Guerra “Bolivia: al pueblo lo que es del pueblo”, Base de documentación CEDIB, 30 de mayo de 2006. Ángel Guerra Cabrera es periodista cubano residente en México y columnista del diario *La Jornada*.

En la calle, la nacionalización era una consigna encendida:

Decenas de miles de personas paralizaron el centro de La Paz al marchar en contra del gobierno y del Congreso, a los que les exigieron la nacionalización de la explotación de los hidrocarburos, mientras otros grupos bloquearon dos importantes rutas.

Los manifestantes intentaron ingresar a la plaza Murillo, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero la policía lo impidió sin que se hubieran registrado incidentes. De todos modos, la fuerza instruyó el desalojo del Congreso ante el posible rebazamiento del resguardo policial.

Las marchas fueron protagonizadas por miembros de la Federación de Juntas Vecinales y de la Central Obrera Regional de la vecina ciudad de El Alto y del partido Movimiento al Socialismo (MAS), fuerzas que han firmado un Pacto por la Dignidad y la Soberanía.

Muchos de los marchistas reclamaron la renuncia del presidente Carlos Mesa y el cierre del Congreso, al calificar al mandatario y a los legisladores de ‘traidores’, porque se oponen mayoritariamente a la nacionalización de los hidrocarburos.

Por otra parte, agrupaciones de indígenas, campesinos y mineros, algunas vinculadas al MAS, iniciaron ayer el bloqueo de la carreteras La Paz-Oruro y Oruro-Cochabamba, dos de las más importantes del país (*Diario de hoy*, 2005)⁹.

La nacionalización implicó que para los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005 había sido superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios, el valor de la producción se distribuiría de la siguiente forma: 82% para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y 32% a través de una participación adicional para YPFB), y 18% para las compañías (que cubriría costos de operación, amortización de inversiones y utilidades).

En otros casos, se nacionalizaron las acciones necesarias para que YPFB controlara como mínimo el 50% + 1 en las empresas Chaco SA, Andina SA, Transredes SA, Petrobras Bolivia Refinación S.A. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia S.A. El plazo fue de 180 días para que las empresas pudieran regularizar su actividad, mediante contratos que cumplieran con los requisitos establecidos para poder seguir operando en el país. De este modo, la larga fila de cuestionamientos a las transnacionales en Bolivia iniciaba una cuenta regresiva acorde con la nueva política económica que buscaba dejar, en Bolivia, la mayor parte de la renta petrolera.

9 *Diario de Hoy* (El Salvador), 17 de mayo de 2005, en <www.elsalvador.com/noticias/2005/05/17/internacionales/int2.asp>.

Los ingresos para Bolivia tras la nacionalización de los hidrocarburos alcanzaron los U\$S 7.110 millones en los cuatro años posteriores a esta medida. Según YPFB, esta cifra supera en 332% a la lograda en los ocho años previos a la nacionalización, en los cuales estuvo vigente el modelo neoliberal. Es cierto, la nacionalización demostraba ser mejor opción para el país, pero ello, no implicaba que no hubiera un costo a pagar.

En contraposición, el autoritarismo y la desconfiguración institucional mediante la cual el gobierno implementaba sus políticas, crearon incertidumbre en torno a la inversión nacional y extranjera por falta de seguridad jurídica. A partir del 2009 se ve como consecuencia una reducción de inversión extranjera directa. Ello, en el sector hidrocarburos es un peligro latente, igual peligro que lo que ha ocurrido con Argentina que ha visto reducido a cero sus niveles de inversión y que en los últimos años padece una crisis de producción por la falta de exploración.

Carlos Alberto López¹⁰ planteaba, en el año 2007, que el resultado de la nacionalización no había ponderado que:

“¿Y qué pensamos que iba a pasar cuando los hidrocarburos en Bolivia se han convertido en rehenes de las posturas, de las consignas y de la demagogia, y los aspectos técnicos, financieros, estratégicos y comerciales son dejados de lado irresponsablemente?

Sin inversión, no importa qué mercados nuevos estemos supuestamente consolidando, sean 20 millones de metros cúbicos a Argentina u otros 30 al Brasil, el gas que hoy se encuentra en forma de reservas, todavía a 6 mil metros de profundidad, está fuera del alcance tanto de las transnacionales como del pueblo y de los dirigentes y otros que pretenden recuperar los hidrocarburos y repartirlos entre los bolivianos. Aún se requieren alrededor de 1.800 millones de dólares de inversión sólo para desarrollar las reservas probadas descubiertas en los últimos ocho años. Se requerirán 4.400 millones de dólares para desarrollar las reservas probadas y probables.

Si los costos de inversión fueran asumidos por el Estado, cada pozo exploratorio seco de U\$S 40 millones representaría un incremento de 0,5 puntos porcentuales en el déficit fiscal. Es decir, un solo pozo seco a cargo de YPFB subiría las previsiones del déficit fiscal para el 2005 de 5,5% a 6,0%. Para encontrar las reservas descubiertas en los últimos ocho años se perforó un promedio de 35 pozos anuales. Para desarrollar los megacampos descubiertos se requerirán alrededor de 15 pozos por campo. Ésas son las magnitudes de inversión requeridas” (*La Prensa*, 2007)¹¹.

10 Ex viceministro de Hidrocarburos y consultor de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos.

11 López, Carlos Alberto “Carta al director” en *La Prensa*, 13 de abril de 2007.

Sin embargo, nada de eso se hizo. El 1° de mayo del 2006, ataviado con el casco petrolero de YPFB, Evo eligió el pozo petrolero de San Alberto –en la región sureña del Chaco (departamento de Tarija), que atesora el 90% del gas y el petróleo de Bolivia– para declarar “muerta” la Ley de Capitalización. Flanqueado por su Ministro de Hidrocarburos y el Presidente del Senado, leyó y firmó el Decreto Supremo 28.701 “Héroes del Chaco” por el que declaró que: “se acabó el saqueo de los recursos naturales de Bolivia”. En 60 días se refundara la estatal YPFB para que se ocupe del control, almacenamiento, distribución e industrialización de los hidrocarburos.

La “bomba” para la petrolera española Repsol es que Morales decreta la “nacionalización de las acciones necesarias para que la estatal YPFB controle, como mínimo, el 50% más uno” en Andina –la filial de Repsol en Bolivia.

“Si las empresas no respetan nuestras medidas, nos haremos respetar a la fuerza”, amenazó.

En cuanto Morales finalizó su intervención televisiva desde la región petrolera del país, el vicepresidente, Álvaro García Linera, hizo su aparición en el balcón del Palacio de Gobierno, en la Plaza Murillo de La Paz. Unas 50 mil personas lo ovacionaron. Linera proclamó: “les hemos dado la vuelta a la tortilla. Si antes las petroleras se llevaban un 82% de los beneficios de nuestros recursos naturales, ahora sólo se llevarán un 18%, y el 82% será para el Estado”¹².

A un año de la nacionalización de los hidrocarburos se promulgaron las 44 leyes de autorización de los contratos petroleros y de gas. Sin embargo, la actividad decayó en volumen, en tanto los ingresos se incrementaron a U\$S 2.168 millones, de los cuales el Estado recibía U\$S 1.649 millones por aumento del valor del precio del gas. Por ello, en un año, la diferencia de ingresos para el Estado creció en un 76% por ciento a diferencia del 25% que recibía en 2004 antes de la nacionalización.

La salida de las empresas, el reajuste salarial de todo el sector, y la crítica permanente de Cámara Boliviana de Hidrocarburos, conjuntamente con el cambio de tres ministros de Hidrocarburos en un año, permitieron ver que el proceso, conducido de esa forma, no fuera reversible. En lo social, el ánimo de los movimientos sociales era tranquilo frente a lo que se consideró una justa reparación. Desde la presidencia, la situación era clara.

Un día después de que el vicepresidente Álvaro García Linera convocara a la movilización popular para defender las políticas del gobierno,

12 *El Mundo* (España), 2 de mayo de 2006.

un grupo de padres de familia de las Juntas Escolares encabezadas por Franklin Gutiérrez, los señores Huamán, Venegas y Choquetarqui, todos acusados de recibir plata del gobierno, intentaron tomar la Casa Social del Maestro en La Paz, sede de la Federación del sector, y apedrearon la Escuela México, todo esto para escarmentar a los dirigentes trotskistas huelguistas que perjudican a sus hijos. El fin de semana pasado, el presidente Evo Morales convocó a los campesinos, indígenas y originarios de los pueblos del oriente, del valle y del occidente a declararse en emergencia para defender la Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos.

Lo que se requiere en esta batalla, definitivamente, es la movilización. Hemos llegado al gobierno con la movilización y vamos a gobernar con la movilización', dijo García Linera en Cochabamba, en un momento de inflexión para la administración de Morales, caracterizado por el estallido de múltiples conflictos sectoriales (*Rebelión*, 2006)¹³.

6. BALANCE DE LA NACIONALIZACIÓN E IMPOSICIÓN ESTATAL

El primero y más importante hallazgo de la investigación realizada es la constatación de que el sector hidrocarburos se maneja independientemente del resto de la dinámica económica del país, pero no así de la política nacional. Esto es evidente en casi todos los momentos del siglo XX, puesto que se vincula sólo con las demandas comerciales internacionales. Por ello, al sostenerse habitualmente que los hidrocarburos han cooperado con el desarrollo regional en estos años, debemos considerar que lo que ha incidido –en alguna medida– son los montos de dinero que han ingresado por concepto de regalías, pero en ningún caso podemos pensar en una planificación estatal que los integre al resto del aparato productivo y menos aún que los procesos que apareja la industria de los hidrocarburos impulsen el resto de la economía. Es más, el olvidado informe de Guido Valle Antelo y Antonio Céspedes Toro, deja al descubierto que mucho más rentable que el petróleo en las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta, fueron los ingentes préstamos de los tradicionales organismos multilaterales. Hoy la renta petrolera se invierte en las prefecturas o gobernaciones del país.

Dicha situación, que es propia de las economías de enclave, se mantuvo en Bolivia de manera constante porque los capitales que se invierten en la industria del sector en el período en estudio ya no son nacionales, sino de enormes consorcios que tienen esa dinámica y no otra. En este sentido, el papel del Estado en el contexto de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos es uno muy distinto con la

13 "Vamos a gobernar con la movilización" en <www.rebelion.org/noticia.php?id=37126&titular=evo-y-alvaro> acceso 6 de septiembre de 2006.

capitalización, pero no desde el punto de vista de la economía: ni con YPFB ni con la capitalización, la economía boliviana ha estado cerca del *take off*.

¿LA NACIONALIZACIÓN CAMBIÓ ALGO ESTA SITUACIÓN?

El tratamiento del sector hidrocarburos y las cuentas alegres que sacó el gobierno de Morales en relación a la forma de gestión del nuevo modelo económico del país, permitieron concluir en el corto plazo que la nacionalización era un éxito consumado. Conclusión más que debatible si se observa la economía boliviana en su conjunto, y mucho más discutible si se observa el resultado que el proceso tuvo en el contexto político nacional.

La nacionalización se llevó a cabo en el 2007, los réditos subieron considerablemente en el lapso de un año, sin embargo, no hubo una extensión de la rentabilidad del sector a otros de la economía nacional. Es más, sectores tales como la agricultura y la ganadería, amplios en uso de mano de obra experimentaron retrocesos que son atribuibles a una extensión de las medidas de control económico por parte del Estado. Industrialmente, tampoco el país creció, y lo que ha permitido la supervivencia del régimen de Morales es el aumento progresivo del valor de los productos primarios en el mercado internacional, por sobre una optimización del sector productivo. En efecto, parece ser que el nuevo estado boliviano ha confiado incluso más de la cuenta en los datos anteriores de la nacionalización, ello es que, aunque no se extraiga el gas, como este existe, el país podrá sacarlo cuando sea el momento. Al respecto, cabe puntualizar que el desarrollo del gas no convencional en la región, ha hecho que Bolivia se haya quedado muy por detrás de otros países que, advirtiendo la necesidad de energía, han optado por explorar todas sus fuentes y potencial gasífero no convencional, error, más grave aún que aquel que supuso que la invasión de GNL a la región no era una amenaza para las exportaciones bolivianas de gas natural (como por ejemplo el caso de Chile)¹⁴.

Justamente esta cuenta es la que, tras la reelección de Morales en 2009, sin considerar la lucha autonomista y la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, han vuelto a sacar a los movimientos sociales a la calle nuevamente.

14 Ver: <www.hidrocarburosbolivia.com/nuestro-contenido/noticias/42122-segun-el-departamento-de-energia-de-eeuu-bolivia-tiene-48-tcf-de-gas-no-convencional-tecnicamente-recuperables.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+hidrocarburosbolivia%2FARpe+%28HidrocarburosBolivia.com++Bolet%3C%ADn+Informativo%29>, acceso 3 de mayo de 2011.

En este contexto, posterior a la nacionalización de hidrocarburos, en el quinquenio no se consolidaron proyectos de ingeniería financiera ni logística especializada para monetizar reservas ni abrieron nuevos mercados. Lo más grave es que la actual administración estatal, teniendo mayoría legislativa y un amplio apoyo electoral, en su momento de arribo al poder en 2006, no logró debatir ni sancionar la Ley de Hidrocarburos y Energía. De manera que esa legislación fundamental no fue priorizada.

Desaciertos permanentes obligaron al gobierno de Morales a subir el precio de combustibles en diciembre 2010 y sostener la medida por menos de una semana por la ola de protestas en todo el país. La impericia de los administradores de la “nacionalización” fue tal que cambiaron más de cinco ministros del sector. Los datos públicos corroboran que la “Nacionalización” propició caída de inversión en exploración, producción y desarrollo de nuevos reservorios.

La ausencia de inversiones se demuestra en menos pozos perforados y en explotación, además de problemas de refinamiento y abastecimiento con desequilibrios entre oferta y demanda de gas y electricidad. Los hidrocarburos convenientemente industrializados debían ser el “producto estrella” de exportación boliviano: a partir de darle valor agregado al gas en electricidad, en plásticos en nuevos combustibles (como diésel y dimetil éter a partir de transformación del gas en procesos GTL), como metanol, urea, sales y fertilizantes y toda la gama de petroquímica (de nueva tecnología a partir del metano). Al no haber desarrollado convenientemente el sector energético boliviano, se notó un “efecto cadena” afectando la industria, el sector agrícola y minero cuyas actividades están ligadas a la necesidad de electricidad, gas y combustibles accesibles o a precio reducido para ser competitivos, lo que se lograría produciendo valor agregado al gas¹⁵.

Algunos de los eventos más sobresalientes de los resultados de la imposición estatal se ubican incluso en arrolladoras gestiones de represión policial como los hechos de Pando de septiembre de 2008:

La insurrección en las regiones ‘rebelde’ al gobierno de Evo Morales, que luchan por legitimar sus estatutos de autonomía y reniegan de la ‘refundación social-indigenista y centralista’ que pretende el mandatario, se saldó ayer con ocho muertos y una treintena de heridos, en el suceso más grave desde que estallaron los disturbios, hace tres días,

15 Gómez, Boris. “Cinco años de nacionalización” en <www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/analisis-y-opinion/42124-cinco-anos-de-nacionalizacion-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+hidrocarburosbolivia%2FARpe+%28HidrocarburosBolivia.com+-+Bolet%C3%ADn+Informativo%29> acceso 3 de mayo de 2011.

y que tuvo como escenario las calles de la ciudad amazónica de Cobi-ja, capital del departamento de Pando. ‘Caos y anarquía’. El prefecto (gobernador) de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, admitió que la situación en su región es ‘incontrolable’, ‘escapa al control de las autoridades’ y aseguró que se ha instaurado el ‘caos y la anarquía’. Los radicales autonomistas también tomaron ayer varias instalaciones gaseras del sureste boliviano y provocaron una importante restricción en el envío del energético hacia Brasil y Argentina, que luego se solventó. Mientras, en la ciudad de Santa Cruz, la más próspera del país, continuaron la toma de edificios públicos y el saqueo (*Crónica*, 2008)¹⁶.

La reacción no se hizo esperar. Reunidos de emergencia, los mandatarios de América de Sur, que llevaron a cabo la primera intervención del Consejo de Defensa de UNASUR en Santiago, expresaron a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, señalando el 12 de septiembre de 2008:

DECLARACIÓN DE LA UNASUR

La Unión de Naciones Suramericanas lamenta la prolongación en la hermana República de Bolivia de las acciones de grupos civiles que conducen a pérdidas de vidas humanas, personas heridas, destrucción de bienes públicos y privados, debilitamiento institucional y riesgos para la democracia, y pueden amenazar su unidad e integridad territorial.

Las Naciones Suramericanas anhelan fervientemente que, a la brevedad posible, se restablezca el orden y la convivencia ciudadana pacífica, y el diálogo orientado a normalizar el funcionamiento de la vida democrática.

Es el deber de esta Presidencia Pro Témpore señalar la total disposición de UNASUR de colaborar con el Gobierno de Bolivia en el esfuerzo por identificar e implementar vías de diálogo y entendimiento que, bajo la conducción de las legítimas autoridades de la nación boliviana, permitan a las fuerzas políticas sociales retomar la senda pacífica, institucional y democrática, de solución de problemas e impulso al desarrollo.

En definitiva, es ciertamente al pueblo boliviano a quien corresponderá, como en toda democracia, identificar las vías de solución a las dificultades por las que atraviesa.

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile¹⁷.

16 “Disturbios en Bolivia dejan 8 muertos” en <www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=384504> acceso 12 de septiembre de 2008.

17 Ver: <http://www.comunidadandina.org/unasur/12-9-08com_bolivia.htm>.

Si bien es cierto que desde Santiago se alentó una investigación del más alto nivel sobre los sucesos acaecidos en Pando, los resultados prácticos de la gestión determinaron un apoyo a la gestión de Morales. Ello se tradujo en un apoyo casi inmediato:

DECLARACIÓN DE LA MONEDA

Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, reunidos en el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile el 15 de septiembre de 2008, con el propósito de considerar la situación en la República de Bolivia y recordando los trágicos episodios que hace 35 años en este mismo sitio conmocionaron a toda la humanidad.

Considerando que el tratado Constitutivo de UNASUR, firmado en Brasilia el 23 de mayo de 2008, consagra los principios del irrestricto respeto a la soberanía, a la no injerencia en asuntos internos, a la integridad e inviolabilidad territorial, a la democracia y a sus instituciones y al irrestricto respeto a los derechos humanos.

Ante los graves hechos que se registran en la hermana República de Bolivia y en pos del fortalecimiento del diálogo político y la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana los países integrantes de la UNASUR:

Expresan su más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del Presidente de la República de Bolivia Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente Referéndum.

Advierten que sus respectivos Gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometan la integridad territorial de la República de Bolivia.

Consecuente con lo anterior, y en consideración ala grave situación que afecta a la hermana República de Bolivia, condenan el ataque a instalaciones gubernamentales y a la fuerza pública por parte de grupos que buscan la desestabilización de la democracia boliviana, exigiendo la pronta devolución de esas instalaciones como condición para el inicio de un proceso de diálogo.

A la vez, hacen un llamado a todos los actores políticos y sociales involucrados a que tomen las medidas necesarias para que cesen inmediatamente las acciones de violencia, intimidación y desacato a la institucionalidad democrática y al orden jurídico establecido.

En este contexto, expresan su más firme condena a la masacre que se vivió en el Departamento de Pando y respaldan el llamado realizado por el Gobierno boliviano para que una Comisión de Unasur pueda constituirse en ese hermano país para realizar una investigación imparcial que permita esclarecer, a la brevedad, este lamentable suceso y formular recomendaciones de tal manera de garantizar que el mismo no quede en la impunidad.

Instan a todos los miembros de la sociedad boliviana a preservar la unidad nacional y la integridad territorial de ese país, fundamentos

básicos de todo Estado y a rechazar cualquier intento de socavar estos principios.

Hacen un llamado al diálogo para establecer las condiciones que permitan superar la actual situación y concertar la búsqueda de una solución sustentable en el marco del pleno respeto al estado de derecho y al orden legal vigente.

En ese sentido, los presidentes de UNASUR acuerdan crear una Comisión abierta a todos sus miembros, coordinada por la Presidencia Pro Tempore, para acompañar los trabajos de una mesa de diálogo conducida por el legítimo Gobierno de Bolivia.

Crean una Comisión de apoyo y asistencia al Gobierno de Bolivia en función de sus requerimientos, incluyendo recursos humanos especializados.

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile¹⁸.

Entre los años 2009 y 2010, el modelo económico se ha profundizado, y las huelgas y los muertos producto de los disturbios callejeros han recordado los peores momentos del gobierno de Sánchez de Lozada, volviendo a recurrirse al expediente del “impuestazo” a fines del 2010:

El gobierno de Bolivia decretó ayer un alza de precios internos de los combustibles de hasta 83%, en una arriesgada decisión política rechazada de inmediato por las poderosas asociaciones de transportistas, que declararon huelga por tiempo indefinido. El vicepresidente del país, Álvaro García, que ejerce la presidencia interina por el viaje de Morales a Venezuela, anunció la medida, que sindicatos y dirigentes opositores han calificado como “gasolinazo brutal” y “cirugía sin anestesia.

“Es una nivelación interna de combustibles a precios internacionales [...], el Estado subvenciona anualmente U\$S 380 millones, no queremos que esto continúe, compramos diesel caro y lo vendemos barato”, justificó García, rodeado de ministros, en una declaración por televisión.

García explicó que la gasolina, que costaba 3,74 bolivianos (casi 50 centavos de dólar estadounidense) por litro, costará desde ahora 6,47 bolivianos (unos 92 centavos de dólar estadounidense) y la gasolina de mayor calidad que estaba en 4,79 bolivianos (unos 68 centavos de dólar estadounidense) subirá a 7,51 bolivianos (más de un dólar estadounidense). El diesel pasará de 3,72 (más de medio dólar) a 6,80 bolivianos.

La sorpresiva decisión rompió la tranquilidad del fin de semana navideño de 2010 y provocó caos en mercados populares, donde los precios subieron de inmediato hasta 50%, y en estaciones de servicio que suspendieron su atención para ajustar sus sistemas a los nuevos precios.

18 Ver: <http://www.comunidadandina.org/unasur/15-9-08com_bolivia.htm>.

La primera reacción organizada fue la de la Confederación de Choferes, que agrupa a los propietarios del transporte, que declaró el paro sin esperar un nuevo tarifario que debe aprobar la Autoridad de Transportes.

Los precios de la mayoría de los combustibles se habían mantenido invariables casi una década en Bolivia.

A principios de 2003, el presidente neoliberal Gonzalo Sánchez prefirió aumentar impuestos en vez de subir los combustibles, para enfrentar un déficit fiscal, pero esto sólo provocó un cruento motín policial que marcó el principio del abrupto fin de ese gobernante ahora refugiado en EE.UU.

El presidente Morales defendió varias veces que no necesitaba de un “gasolinazo ni de un “impuestazo” para aumentar los ingresos del Estado, y criticó a sus antecesores que aplicaron esas medidas¹⁹.

Como sabemos, este decreto no llegó a aplicarse por las movilizaciones callejeras desencadenadas, a estos efectos, en las principales ciudades del país. Ello es, quizás, lo que conduce a la reacción por el tema marítimo, el otro resorte utilizado habitualmente por la política interna de Bolivia cuando no se logra mantener y solventar la cohesión interna de los gobiernos en el país. Ya no por la vía de los impuestos, sino por la vía de la convocatoria a los principales actores de la política exterior boliviana, el 23 de marzo de 2011, y en medio de un clima de impopularidad latente de la gestión del gobierno de Morales, el Presidente formuló una declaración expresa de llevar la demanda marítima a los tribunales internacionales. El resultado de estas declaraciones ha tranquilizado el ambiente político nacional y propiciado un diálogo nacional al respecto en la creación de la Dirección de Asuntos Marítimos de la Cancillería Boliviana. Con ello, no puede sostenerse que no asistamos a la emergencia de nuevos pronunciamientos sociales en el país. En los hechos, se abre un “cuarto intermedio” en la gestión del gobierno para la reingeniería que la nacionalización y el nuevo modelo económico han creado en el país.

En el acontecer boliviano se advierte un fenómeno de larga duración: la incapacidad de formular una estrategia armónica de desarrollo del país, basada en algo más que no sea la exportación de materias primas. El desafío de la política de hidrocarburos radica en la recuperación de las inversiones. Para ello, la confianza en las instituciones y el control de la tensión social será determinante en la consecución de esta meta.

19 Ver: <<http://www.eluniversal.com.mx/internacional/71056.html>>, acceso 27 de diciembre de 2010.

BIBLIOGRAFÍA

- Albarracín Millán, J. 2008 El súper Estado minero y el derrumbe de la oligarquía Boliviana (La Paz: Plural).
- Albo, X. y Barrios, R. (coord.) 1993 *Violencias encubiertas en Bolivia* (La Paz: CIPCA-ARUWIYIRI).
- Barrios, R. y Mayorga, R. 1994 La cuestión militar en cuestión. Democracia y fuerzas armadas (La Paz: Ceben).
- Cariaga, J. 2007 De Sánchez de Lozada a Morales Ayma. Crónicas sobre la economía y finanzas en Bolivia (La Paz: La Razón/El Nuevo Día/Los Amigos del libro).
- Carrasco, C. 2006 De la revolución a la descolonización. Un itinerario político y diplomático 1952-2006 (La Paz: Virgen niña).
- García Linera, A. 2008 La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia (Buenos Aires: CLACSO).
- Gómez, L. 2006 El alto de Pie. Una insurrección Aymara en Bolivia (La Paz: WA-GUI).
- Greve López, H. et al. 2007 Regímenes económico, social y territorial del estado con autonomías (La Paz: Plural).
- Mansilla, H. C. F. 2007 Los problemas de la autonomía en el oriente boliviano. La ideología de la Nación Camba en el espejo de las fuentes documentales (Santa Cruz de la Sierra: Editorial El País).
- Mansilla, H. C. F. 2003 La policía boliviana. Entre los códigos informales y los intentos de modernización (La Paz: Plural).
- Mesa Gisbert, C. 2008 Presidencia sitiada. Memorias de mi Gobierno (La Paz: Plural).
- Mirza, C. 2006 Movimientos sociales y Sistemas políticos en América Latina. La construcción de nuevas democracias (Buenos Aires: CLACSO).
- Paz, G. y Roett, R. 2003 *América Latina en un entorno global en proceso de cambio* (Buenos Aires: ISEN Nuevo Hacer/Grupo Editor Latinoamericano).
- Seoane, J. (comp.) 2003 Movimientos Sociales y Conflicto en América Latina (Buenos Aires: CLACSO).
- Sierra, M. y Subercaseaux, E. 2007 *Evo Morales. Primer indígena que gobierna en América del Sur* (Santa Cruz de la Sierra: El País).
- Uriona, P. et al. 2008 Variaciones sobre un mismo tiempo. Ensayos sobre la política en Bolivia (1982-2004) (La Paz: Gente común).
- Verdoso, L. 2005 El proceso constituyente en Bolivia-a horcajadas entre la nación y sus partes (La Paz: Plural).